Si aún quedaba alguna duda acerca de la importancia de las economías regionales para el desarrollo de nuestro país, el 2020 fue el año que no solo dejó en claro que sin productores no hay alimentos, sino también visibilizó el compromiso del sector agroalimentario para garantizar el abastecimiento de la mesa diaria de todos los argentinos.

Desde el área de Economías Regionales (ER) de CAME se gestionó, un año más, en defensa de la rentabilidad y competitividad de la pyme agropecuaria, procurando políticas públicas integrales y medidas diferenciales que contemplaran tanto las asimetrías de la estructura productiva nacional como la heterogeneidad regional.

Durante el 2020, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO); los encuentros nacionales y regionales presenciales no pudieron llevarse a cabo. En su lugar y para conocer las demandas de cada sector productivo, el sector organizó reuniones periódicas a través de la plataforma *Zoom* con productores agropecuarios y agroindustriales nucleados en la Mesa Chica de Economías Regionales y la Mesa Agroalimentaria.

Entre las actividades realizadas junto con los productores se destacaron los webinarios, que contaron con un alto nivel de participación a nivel nacional e internacional, y las encuestas. Esta última herramienta permitió elaborar diagnósticos, en distintos momentos de la pandemia de COVID-19, sobre el estado de la cadena de pagos, de provisión, requerimientos de capital de trabajo, etc.; información estratégica que fue elevada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La falta de disponibilidad de efectivo y la multiplicidad de permisos de circulación, fueron dos de los temas que requirieron la intervención del sector de Economías Regionales de CAME. Luego de las gestiones realizadas, se aprobó un permiso único de circulación válido en todo el territorio nacional y se logró restablecer el funcionamiento del sistema bancario para poder pagar los salarios de los trabajadores temporarios (no bancarizados) y comprar diversos insumos que requerían pago de contado (gasoil, por ejemplo).

Como miembro permanente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el sector participó de los debates paritarios y analizó el alcance de diversas inclemencias climáticas sufridas a lo largo y ancho del país. En la CNTA, la postura de CAME fue clara: no permitir que durante la pospandemia sigan desapareciendo empresas, pudiendo así conservarse las fuentes de trabajo.

Además, el área continuó elaborando mensualmente el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) y comenzó a difundir infografías que desagregan los precios de los productos agropecuarios, visibilizando el impacto de la presión tributaria y la participación de cada eslabón de la cadena de valor en el precio final.

La agenda de trabajo del 2021 perseguirá un ambicioso objetivo: acompañar a las pymes agropecuarias, ya sea brindándoles herramientas concretas desarrolladas junto con otros departamentos de la entidad o bien logrando el diseño de políticas públicas más eficientes e integrales para el agro, en pos de su rentabilidad y sostenibilidad.

En ese sentido, la gestión del sector estará orientada a alcanzar todas aquellas medidas que sean necesarias para el normal desarrollo de la actividad, entre las que se encuentran, por ejemplo: rediseño del esquema tributario por uno más “racional”, que evite la superposición de tasas y tributos en los 3 niveles -es clave la eliminación de las retenciones a la totalidad de las economías regionales-; estudio de las cadenas de valor para comenzar a sentar las bases del “Comercio Justo”, generando una mayor transparencia comercial; garantización de la disponibilidad de mano de obra mediante la compatibilización de Planes Sociales y Trabajo Registrado; y reducción del costo laboral, a partir de una actualización del Mínimo No Imponible (MNI); entre otras.